

LA SITUACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES Y LA AGENDA SOCIAL: LA NEGOCIACIÓN EN EL MARCO DEL NEOLIBERALISMO

**GUSTAVO CASTRO SOTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO; 2 DE OCTUBRE DE 1996**

Al hablar del dialogo entre el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la Delegación Gubernamental, enmarcándolo dentro del proceso de pretender pacificar Centroamérica y ahora Chiapas, podemos comprenderlo mejor al hacer referencia con las negociaciones de paz en Nicaragua entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la Contra Nicaragüense; entre el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y el Gobierno de El Salvador; y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el Gobierno de Guatemala. Estas negociaciones tienen en común un formato y diseño que aterriza según las condiciones de cada país. Por las consecuencias que ha traído el proceso de negociación, es evidente que este diseño es dirigido por el Fondo Monetario Internacional y por los grandes intereses internacionales, principalmente por el gobierno de los Estados Unidos.

La firma del FSLN y la Contra en Nicaragua, se diseñó de tal forma que pudiera tocar el punto central que desarticulara al régimen Sandinista, y se llegó a un proceso electoral en el que el FSLN perdió el poder y trajo como consecuencia el arribo de la Unión Nacional Opositora (UNO), que ha estado impulsando un programa de gobierno que favorece a las empresas extranjeras y permitir cada vez más la privatización de paraestatales, el deterioro de las condiciones de vida del pueblo nicaragüense, el incremento de la delincuencia tanto por excombatientes guerrilleros como de la excontra, el incremento del flujo de mano de obra indocumentada a Estados Unidos, etc. Este proceso de negociación logró su objetivo: el derrumbe del sistema de gobierno Sandinista y la toma del poder por la UNO. El proceso de negociaciones entre el FMLN y el gobierno de El Salvador se da dentro de este marco en donde el FMLN le apostó y confió que, desarticulando la parte política de la estructura que durante muchos años le permitió a la Democracia Cristiana y la oligarquía salvadoreña su permanencia en el poder, como consecuencia lógica se podía desarticular la parte económica y social y lograr así una reestructuración total del país. Sin embargo, esto no fue así. Los Acuerdos de Paz alcanzados no lograron desarticular al régimen, aunque lograron avances significativos, entre otros: la compra de tierra rural y urbana; la desarticulación de los escuadrones de la muerte y bandas paramilitares; la reducción del Ejercito y la constitución de la Policía Nacional Civil, con la integración de un 20% de excombatientes del FMLN, 20% del Ejercito y 60% de la Sociedad Civil. Pero no todos los acuerdos han sido cumplidos cabalmente. Ante el lento y paulatino cumplimiento de ellos, existe un proceso acelerado de privatización y se repiten las mismas consecuencias negativas contra el pueblo como en Nicaragua. En El Salvador, la oligarquía continúa en el poder, pero ahora de manera reestructurada y reorganizada a través de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

Los recientes Acuerdos de Paz firmados entre la URNG y el gobierno de Guatemala, no se diferencia mucho de los de El Salvador. Es cierto también que se lograron acuerdos importantes, pero la parte política del régimen no se toca, solo la parte que corresponde a la justicia que hasta eso son bastantes ambiguos y tampoco garantiza la participación de la mujer en las decisiones del país, entre otras lagunas. Si bien es cierto que hay acuerdos alcanzados como la reducción del ejercito a un 33%, la desarticulación de las Patrullas de Autodefensa Civil (aunque hasta la fecha prevalecen en la zona del Ixcán y el Quiché), tampoco se modifica en su totalidad la estructura del régimen ni se garantizan los cumplimientos de dichos acuerdos.

Si comparamos los recientes procesos de negociación en Centroamérica con la del EZLN y el Gobierno mexicano, vemos que el punto central de las negociaciones, el de la DEMOCRACIA, se minimiza lo más posible. Mientras, para el gobierno mexicano la democracia solo se juega en el aspecto electoral, con el peligro de legitimar al gobierno en su poder y al actual partido de estado. ¿Y que la sociedad civil no cuenta?

Este esquema de la participación política solo por la vía puramente electoral que siguen muchos dirigentes políticos, choca con la propuesta política del EZLN de ejercer el poder desde la sociedad civil, independientemente del partido en turno, de "mandar obedeciendo", desde ejercer el poder no desde la toma del aparato de estado sino desde la fuerza de la sociedad civil organizada, democrática y prepositiva.

Para las comunidades indígenas, que tienen vocación democrática, sin necesidad de partidos políticos y sin reducir todo al nombramiento de las autoridades, existe la necesidad de tomarlos en cuenta desde los espacios de discusión más pequeños a los más grandes en el diseño, planificación, ejecución, verificación y evaluación de su propio destino en el aspecto económico, político y social. Sin embargo, paralelamente a este proceso de negociación y desde antes incluso, el proyecto neoliberal en el país ha venido avanzando, porque la privatización de las paraestatales, las contrarreformas que se han impuesto a la constitución Mexicana, solo las lleva a cabo el gobierno y los 24 empresarios más grandes del país que, perdida la capacidad de hegemonía y consenso en la población, intentan hacerlo por la coerción y militarización del país. Ello nos confirma que en este proceso de negociación no toca a fondo las necesidades y el clamor de los mexicanos: "la transición a la democracia".

La ventaja que pueda tener el EZLN es no cometer los errores de los países Centroamericanos, de no firmar los acuerdos en paquete global, sino más bien, mientras no se cumplan y se verifiquen los acuerdos de "Derechos y Cultura Indígena", avanzar a los demás puntos de la negociación, porque de papeles y promesas, mucho ha dado el actual régimen durante más de 65 años. Por lo tanto, el avance de las negociaciones en Chiapas depende mucho de la voluntad del gobierno en hechos concretos. LA ESTRATEGIA DEL DIALOGO Tal como están diseñados los puntos de la agenda de negociación, pareciera indicar que tendía al estancamiento. La Mesa 1 sobre "Derechos y Cultura Indígena" indicó que el diseño en las tres fases de negociación apuntarían siempre a presionar y a debilitar al EZLN.

Esto quiere decir que en la Primera Fase, en la explicación del diagnóstico del problema indígena, el gobierno reconoció la marginación y pobreza de las comunidades, pero no presentó alternativas nuevas, más bien propuso elementos que en la actualidad ya se realizan, por lo que no mostró voluntad de cambio. Los avances que se lograron fueron mínimos y sirvieron más como justificación de una campaña propagandística en todos los medios de difusión, sobre todo en el sentido de que se estaban ejecutando los acuerdos de San Andrés, cuando solo han sido las "migajas que siempre ha otorgado el gobierno mediante el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). Pero, ¿qué pasó con la entrega de las radios indígenas a los pueblos indios, el respeto a las formas y costumbres tradicionales de nombrar a sus autoridades, entre otras? La respuesta del gobierno ha sido la imposición de alcaldes municipales por medio de la policía y guardias blancas, como en los municipios de Venustiano Carranza, Sabanilla, El Bosque y San Andrés y apoyando los intereses caciquiles, políticos y económicos de las regiones, por mencionar algunos ejemplos.

Aunado a esto, unos días antes y después de cada fase de negociación, el Ejército Federal se introduce a las comunidades indígenas con el pretexto del narcotráfico, labor social, abastecimiento, relevos, etc. Su verdadera intención es detectar los medios y mecanismos de comunicación entre las comunidades indígenas zapatistas y movilizar su tropa, entre otros objetivos. Además, su intervención se acrecienta en la medida en que se acerca la Tercera Fase donde se firman los acuerdos, con la finalidad de que el EZLN llegue débil a las negociaciones y acepte las proposiciones del gobierno. Mientras, durante los momentos de la negociación, los guardias blancos y paramilitares son los que intervienen desalojando, asesinando, reprimiendo a campesinos de las distintas organizaciones sociales con el fin de presionar a la mesa de negociaciones.

Así, la Ley de Concordia y Pacificación para una Paz Justa y Digna en Chiapas, es violada tanto por el gobierno del Estado como Federal. Al llegar a la Segunda Fase de la Mesa 2, "Democracia y Justicia", el gobierno solo se concretó a presentar los acuerdos de la reforma política llevada a cabo en el Congreso Federal con los Partidos Políticos, por lo que le interesaba lograr esta negociación con ellos para usarlo como techo de las negociaciones con el EZLN; acuerdos sin discusión, mucho menos propuestas de la sociedad en su conjunto por lo que no representan los intereses de los diversos sectores del pueblo. Aquí se trabó la negociación por la naturaleza del tema, ya que las profundas reformas políticas que requiere el país para una transición a la democracia, el gobierno no estuvo dispuesto a cederlas. Los otros dos temas de negociación "Bienestar y Desarrollo" y "Mujer Indígena en Chiapas" son más fáciles de resolver, porque otorgan la posibilidad al gobierno de llevar a cabo un guerra de contrainsurgencia, si no se logra una buena negociación por parte del EZLN y sus asesores. La situación se había venido agravando. La actitud del gobierno ante la delegación zapatista siempre ha sido la del chantaje, de ejecutar órdenes de aprehensión (más de 2 mil 700) si no hay firma de acuerdos por la supuesta violación de la Ley. El discurso del gobierno es enmarcar todo dentro de la Ley sin mostrar voluntad de una verdadera solución política al conflicto armado. LOS ATAQUES A LA CONAI Con el proceso de las negociaciones, el gobierno tenía la impresión que todo estaba reducido a

su verdadera dimensión: el EZLN arrinconado en la Selva, militarmente sin posibilidades y, además, amarradas las manos al aceptar la Ley de Concordia y Pacificación propuesta por el gobierno. La Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) que preside el Obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz García, ya no tendría el papel protagónico, porque presumiblemente estaba desplazada por la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), formada por Diputados y Legisladores del Congreso Federal; y las organizaciones campesinas e indígenas divididas y débiles, etc. Sin embargo, la preocupación del gobierno era y siempre ha sido la Diócesis de San Cristóbal, que para este momento la considera más peligrosa que el EZLN, principalmente en la zona norte del Estado, donde empezaron a operar con más fuerza los grupos paramilitares, lanzando amenazas de muerte contra los sacerdotes de Simojovel y Tila. También hubo un intento de violación a la una religiosa en Oxchuc; la expulsión de los 3 sacerdotes y la amenaza de expulsar a más sacerdotes extranjeros y religiosas de la Diócesis. En la medida que se golpea a la Diócesis, también se golpea a la CONAI y, directamente, a Don Samuel Ruiz y a la sociedad civil en la medida en que representa la mediación nacional de un conflicto con las mismas dimensiones. LAS NEGOCIACIONES Y LA APARICIÓN DEL EPR Independientemente de la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR), primero en Guerrero, y después en otros estados de la república, la mesa de negociaciones de San Andrés ya estaba en crisis y de todas maneras tenía que estancarse. La actitud del gobierno lo hacía evidente. Al aparecer el EPR, el gobierno empezó a lanzar calificativos sobre el EZLN como la "guerrilla buena", y el de "guerrilla mala" contra el EPR, pretendiendo provocar el deslinde del EZLN y su confrontación con el EPR, lo que no sucedió. Además, argumentaba que no podía sentarse a negociar con "terroristas. Sin embargo, ha tomado una actitud ofensiva contra el EZLN sosteniendo que no son los únicos interlocutores ni representan a la sociedad civil mexicana, por lo tanto le favorece y refuerza sus argumentos de que las negociaciones son solo chiapanecas quedando excluida la negociación y el diálogo nacionales.

Ante esto, el EZLN lanza una propuesta al gobierno para reanudar el diálogo bajo las siguientes demandas:

1. la instalación de la Comisión de Verificación y Seguimiento de los acuerdos
2. cumplimiento de los acuerdos de la Mesa 13) la desaparición de los guardias blancas en la zona norte o su reconocimiento y uniformarlos por parte del gobierno
3. liberación de los presuntos zapatistas presos en el Distrito Federal y en Yanga, Veracruz y
4. El trato con respeto a la delegación zapatista por parte de la delegación gubernamental, de lo contrario no regresa a las negociaciones. La CONAI ha lanzado iniciativas a la sociedad civil mexicana y al gobierno federal para establecer un diálogo nacional, incluyendo al EZLN y al EPR. Ante esto, la respuesta oficial ha sido la amenaza de desconocimiento de la CONAI como mediación, ya que está tomando atributos que no le corresponden. Mientras que la creciente militarización del país poco a poco va agravando la situación nacional, las violaciones a los derechos humanos contra campesinos e indígenas,

principalmente contra las organizaciones del Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN), cada vez aumentan más por parte de las fuerzas policiacas y militares. Este incremento se da después del 1 de septiembre, cuando en su informe presidencial, Ernesto Zedillo ordenó aplicar toda la fuerza del Estado contra los terroristas.

En la actual situación, ya no basta con cambiar el formato, las reglas de procedimiento y las actitudes de ambas partes en la mesa de negociaciones en San Andrés. Es necesario un diálogo nacional, no solo con las organizaciones armadas que hasta ahora han aparecido, si no con los distintos actores de la sociedad mexicana y los partidos políticos; que exista congruencia entre la mesa de negociaciones y la situación militar, es decir, a mayor avance de las negociaciones, mayor desmilitarización y menos accionar de los grupos paramilitares; es necesario abrir mayores espacios de negociación y destrabar la lógica de que, a mayor "avance" en las negociaciones, mayor aumento del conflicto, como lo fue en el caso de El Salvador.

LA AGENDA SOCIAL

Desde la interrupción de las negociaciones en mayo del presente año, en el contexto de la sentencia contra Javier Elorriaga y Sebastián Etzín, el EZLN aprovechó desde entonces la ocasión para demandar cambios en el diálogo: 1) exigió un diálogo nacional con la participación de la sociedad civil siempre y cuando ella lo demandara. Tardaron semanas para que así lo solicitaran en un documento donde la CONAI de adhiere; 2) cambio en el formato de las negociaciones que el gobierno niega modificar substancialmente; 3) diálogo con los tres poderes de la Unión, que también el gobierno niega aceptar y; 4) cambio de la representación de la delegación gubernamental que el presidente Zedillo sigue ratificando.

Alrededor de estas demandas, la sociedad civil se ha desbordado por adherirse a ellas. La agenda de la sociedad civil se centra ahora sobre estas demandas y el mes de octubre se presente un escenario favorable, pero no menos difícil. Del 8 al 12 de octubre, en la ciudad de México se llevara' a cabo el Congreso Nacional Indígena al cual la comandancia del EZLN desea asistir pase lo que pase, haciendo un llamado a la sociedad civil para colaborar en su protección; en las mismas fechas se llevará a cabo, pero en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, la asamblea del FAC-MLN que en las últimas semanas han sido acosados y encarcelados varios de sus miembros en diversos estados de la República; el 2 de octubre se conmemora la matanza de los estudiantes en Tlatelolco en 1968; el 12 de octubre se conmemora el día de la raza, fechas donde se registra en todo el país diversas movilizaciones que, con el contexto actual, podrían desencadenar más reacciones de las esperadas. Por otro lado, la Unión Nacional Lombardista (UNAL), cuyo dirigente, diputado perredista y evangélico Chamula, fue expulsado de su partido y después desaforado por el congreso local, anuncia la movilización en los primeros días del mes en muchas cabeceras municipales del estado donde se encuentran fuertes conflictos con los grupos paramilitares y de tipo poselectoral.

Todos estos acontecimientos se están dando en el contexto nacional sobre la fuerte discusión de la venta de las petroquímicas en el país; la aclaración y posible comparecencia de Carlos Salinas de Gortari por su supuesta complicidad en la muerte de Colosio, quien fuera candidato del PRI a la presidencia; del fraude escandaloso en la venta de TELMEX; los fraudes de CONASUPO donde se involucra a la familia del expresidente; el incremento de la militarización en el país y la venta de armamento y equipo bélico del gobierno estadounidense a México así como su asesoría e injerencia en la guerra contra el narcotráfico y la aparición del EPR.

Durante el mes de octubre, la agenda política es del EZLN. El EPR, en diversos comunicados dados a conocer por la prensa nacional, afirman que no llevarán acciones militares hasta después de las elecciones para gobernador del estado de Guerrero (6 de octubre). Este paréntesis de sus acciones permitirán que sea el EZLN el que defina su situación ante el diálogo y la presión por parte de la sociedad civil para abrir nuevos cauces a una salida política al conflicto. Por su parte, el gobierno no pierde su tiempo. La división entre las organizaciones y su debilitamiento sigue avanzando. El ala "oficial" sigue apareciendo: Xi'Nich-Oficial, Aric-Oficial, Ongs-oficial, Magisterio-Oficial (charro), OPEZ-Oficial, grupos paramilitares-oficiales, partidos-oficiales (PRD y PDCH), etc.

CHIAPAS EN CIFRAS

- **Total de población derecho-habiente del sector salud:** 554 357.
- **Total de población usuaria del servicio del sector salud:** 2 699 351 (55.8%)
- **Total de médicos del sector salud:** 2 834 (1 médico por cada 1 132.85 personas).
- **Total de unidades médicas (consulta externa y hospitalización) del sector salud:** 858
- **Total de población derecho-habiente de la Secretaría de la Defensa nacional -SDN- (1994):** 31 40
- **Total de población usuaria del servicio de salud de la SDN (1994):** 21 820
- **Total de médicos de la SDN (1994):** 317 - Total de unidades médicas de la SDN (1994): 12
- **10 municipios con mayor población derecho-habiente del sector salud:** Tuxtla, Tapachula, San Cristóbal, Comitán, Huixtla, Tonalá, Venustiano Carranza, Villa Las Flores, Arriaga y Palenque.
- **10 municipios con menor población derecho-habiente del sector salud:** Metapa, El Porvenir, Chapultenango, Larráinzar, Ocoatepec, Tapalapa, Amatenango del Valle, Chamula, Sabanilla y Soyaló. - 10 municipios con el mayor número de personal médico del sector salud: Tuxtla, Tapachula, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Tonalá. Ocosingo, Villaflores, Huixtla, Palenque y Pichucalco.
- **Municipios con el un personal médico del sector salud:** Amatán, Bejuical de Ocampo, Coapilla, Chanal, Chapultenango, Chiapilla, La Grandeza, Ixtacomitán, Larráinzar, Mazatán, Nicolás Ruiz, Osumacinta, Pantepec, Rayón, Sitalá, Sunuapa y San Lucas.